



Antología de Ética

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, del Consejo Pontificio Mexicano

En un mundo marcado por desafíos complejos y una constante búsqueda de equilibrio, nos encontramos ante la necesidad de comprender y aplicar los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. A través de este compendio, elaborado por el Consejo Pontificio Mexicano, exploraremos los pilares esenciales que guían nuestras reflexiones en torno a los Derechos Humanos, el Bien Común, el principio de Subsidiariedad, la Participación, la Solidaridad y la Autoridad Política.

En primer lugar, los Derechos Humanos se presentan como una brújula moral ineludible, que reclama el respeto y la promoción de la dignidad inherente a cada persona. Este compendio nos invita a profundizar en el entendimiento de los derechos fundamentales y su relación con la justicia, la libertad y la responsabilidad, abriéndonos a la importancia de su protección y garantía para una sociedad justa y equitativa.

El Bien Común, por su parte, se erige como un objetivo compartido que trasciende los intereses particulares, llamándonos a buscar el desarrollo integral de todos los individuos y comunidades. Este compendio nos conduce a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la fraternidad como cimientos para la construcción de un mundo más justo, en el que se promueva el acceso equitativo a los bienes materiales y espirituales necesarios para el pleno desarrollo de la persona.

El principio de Subsidiariedad, otro pilar fundamental de esta Doctrina Social, nos insta a reconocer y promover la autonomía y responsabilidad de los distintos ámbitos de la sociedad. En este compendio, se nos invita a valorar la importancia de una adecuada distribución de las funciones y roles en

la toma de decisiones, fomentando la participación activa de todos los actores sociales y evitando la concentración excesiva de poder.

Asimismo, el compendio nos adentra en la noción de Participación como un derecho y un deber de todos los miembros de la sociedad. A través de su lectura, comprendemos la importancia de la participación ciudadana y su contribución al fortalecimiento de la democracia y la promoción de un diálogo constructivo entre los diversos sectores de la sociedad.

La Solidaridad, por su parte, se revela como un valor esencial que nos impulsa a reconocer nuestra interdependencia y a actuar en beneficio del prójimo. En este compendio, se nos anima a reflexionar sobre la solidaridad como una virtud que nos lleva a compartir los recursos y a promover acciones concretas en favor de los más necesitados, construyendo así un entramado social más humano y justo.

Por último, el compendio nos invita a considerar la Autoridad Política como un servicio al bien común, guiada por la ética y la responsabilidad hacia toda la sociedad. Exploraremos la importancia de que las autoridades ejerzan su liderazgo con rectitud, promoviendo el bienestar de todos y generando políticas y estructuras que fomenten la justicia y el desarrollo integral.

A través de esta lectura del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nos adentraremos en un camino de reflexión y discernimiento, con la intención de enriquecer nuestra comprensión sobre los Derechos Humanos, el Bien Común, el principio de Subsidiariedad, la Participación, la Solidaridad y la Autoridad Política. Que esta búsqueda nos inspire a construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida con el bienestar integral de cada persona y comunidad."

Compendio de la Doctrina social de la Iglesia Consejo Pontificio Mexicano

IV. LOS DERECHOS HUMANOS

a) El valor de los derechos humanos

152 El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana.³⁰² La Iglesia ve en estos derechos la extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para que, mediante su consolidación, la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente como característica impresa por Dios Creador en su criatura.³⁰³ El Magisterio de la Iglesia no ha dejado de evaluar positivamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que Juan Pablo II ha definido « una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad ». ³⁰⁴

153 La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano.³⁰⁵ Esta dignidad, connatural a la vida humana e igual en toda persona, se descubre y se comprende, ante todo, con la razón. El fundamento natural de los derechos aparece aún más sólido si, a la luz de la fe, se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios y herida profundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su encarnación, muerte y resurrección.³⁰⁶

La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos,³⁰⁷ en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son « universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto ». ³⁰⁸ Universales, porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna de

tiempo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en cuanto « inherentes a la persona humana y a su dignidad » ³⁰⁹ y porque « sería vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de todos, en todas partes y con referencia a quien sea ». ³¹⁰ Inalienables, porque « nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno sólo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su propia naturaleza ». ³¹¹

154 Los derechos del hombre exigen ser tutelados no sólo singularmente, sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales —materiales y espirituales— de la persona: « Tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos del bien de la persona y de la sociedad... La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por cada uno de los derechos ». ³¹² Universalidad e indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos: « Son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos humanos en las diversas culturas, así como de profundizar en su dimensión jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto ». ³¹³

b) La especificación de los derechos

155 Las enseñanzas de Juan XXIII,³¹⁴ del Concilio Vaticano II,³¹⁵ de Pablo VI ³¹⁶ han ofrecido amplias indicaciones acerca de la concepción de los derechos humanos delineada por el Magisterio. Juan Pablo II ha trazado una lista de ellos en la encíclica « Centesimus annus »: « El derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido; el derecho a vivir en una familia unida

y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos; el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona ».317

El primer derecho enunciado en este elenco es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural,³¹⁸ que condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho y comporta, en particular, la ilicitud de toda forma de aborto provocado y de eutanasia.³¹⁹ Se subraya el valor eminente del derecho a la libertad religiosa: « Todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos ».320 El respeto de este derecho es un signo emblemático « del auténtico progreso del hombre en todo régimen, en toda sociedad, sistema o ambiente ».321

c) Derechos y deberes

156 Inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los deberes del hombre, que halla en las intervenciones del Magisterio una acentuación adecuada. Frecuentemente se recuerda la recíproca complementariedad entre derechos y deberes, indisolublemente unidos, en primer lugar en la persona humana que es su sujeto titular.³²² Este vínculo presenta también una dimensión social: « En la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponde en los

demás el deber de reconocerlo y respetarlo ».323 El Magisterio subraya la contradicción existente en una afirmación de los derechos que no prevea una correlativa responsabilidad: « Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen ».324

d) Derechos de los pueblos y de las Naciones

157 El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las Naciones,³²⁵ pues « lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos ».326 El Magisterio recuerda que el derecho internacional « se basa sobre el principio del igual respeto, por parte de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad ».327 La paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia.³²⁸

Los derechos de las Naciones no son sino « los "derechos humanos" considerados a este específico nivel de la vida comunitaria ».329 La Nación tiene « un derecho fundamental a la existencia »; a la « propia lengua y cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve su "soberanía" espiritual »; a « modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo, naturalmente, toda violación de los derechos humanos fundamentales y, en particular, la opresión de las minorías »; a « construir el propio futuro proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada ».330 El orden internacional exige un equilibrio entre particularidad y universalidad, a cuya realización están llamadas todas las Naciones, para las cuales el primer deber sigue siendo el de vivir en paz, respeto y solidaridad con las demás Naciones.

e) Colmar la distancia entre la letra y el espíritu

158 La solemne proclamación de los derechos del hombre se ve contradicha por una dolorosa realidad de violaciones, guerras y violencias de todo tipo: en primer lugar los genocidios y las deportaciones en masa; la difusión por doquier de nuevas formas de esclavitud, como el tráfico de seres humanos, los niños soldados, la explotación de los trabajadores, el tráfico de drogas, la prostitución: « También en los países donde están vigentes formas de gobierno democrático no siempre son respetados totalmente estos derechos ».331

Existe desgraciadamente una distancia entre la « letra » y el « espíritu » de los derechos del hombre³³² a los que se ha tributado frecuentemente un respeto puramente formal. La doctrina social, considerando el privilegio que el Evangelio concede a los pobres, no cesa de confirmar que « los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás » y que una afirmación excesiva de igualdad « puede dar lugar a un individualismo donde cada uno reivindique sus derechos sin querer hacerse responsable del bien común ».333

159 La Iglesia, consciente de que su misión, esencialmente religiosa, incluye la defensa y la promoción de los derechos fundamentales del hombre,³³⁴ « estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos ».335 La Iglesia advierte profundamente la exigencia de respetar en su interno mismo la justicia ³³⁶ y los derechos del hombre.³³⁷

El compromiso pastoral se desarrolla en una doble dirección: de anuncio del fundamento cristiano de los derechos del hombre y de denuncia de las violaciones de estos derechos.³³⁸ En todo caso, « el anuncio es siempre más importante que la denuncia, y esta no puede prescindir de aquél, que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta ».339 Para ser más eficaz, este esfuerzo debe abrirse a la colaboración ecuménica, al diálogo con las demás religiones, a los contactos oportunos

con los organismos, gubernativos y no gubernativos, a nivel nacional e internacional. La Iglesia confía sobre todo en la ayuda del Señor y de su Espíritu que, derramado en los corazones, es la garantía más segura para el respeto de la justicia y de los derechos humanos y, por tanto, para contribuir a la paz: « promover la justicia y la paz, hacer penetrar la luz y el fermento evangélico en todos los campos de la vida social; a ello se ha dedicado constantemente la Iglesia siguiendo el mandato de su Señor ».340

CAPÍTULO CUARTO

LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

I. SIGNIFICADO Y UNIDAD

160 Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia ³⁴¹ constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica: se trata del principio de la dignidad de la persona humana —ya tratado en el capítulo precedente— en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento,³⁴² del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad. Estos principios, expresión de la verdad íntegra sobre el hombre conocida a través de la razón y de la fe, brotan « del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias —comprendidas en el Mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la Justicia— con los problemas que surgen en la vida de la sociedad ».343 La Iglesia, en el curso de la historia y a la luz del Espíritu, reflexionando sabiamente sobre la propia tradición de fe, ha podido dar a tales principios una fundación y configuración cada vez más exactas, clarificándolos progresivamente, en el esfuerzo de responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social.

161 Estos principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social

en su conjunto: desde las relaciones interpersonales caracterizadas por la proximidad y la inmediatez, hasta aquellas mediadas por la política, por la economía y por el derecho; desde las relaciones entre comunidades o grupos hasta las relaciones entre los pueblos y las Naciones. Por su permanencia en el tiempo y universalidad de significado, la Iglesia los señala como el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales, necesario porque de ellos se pueden deducir los criterios de discernimiento y de guía para la acción social, en todos los ámbitos.

162 Los principios de la doctrina social deben ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. Esta exigencia radica en el significado, que la Iglesia misma da a la propia doctrina social, de « corpus » doctrinal unitario que interpreta las realidades sociales de modo orgánico.³⁴⁴ La atención a cada uno de los principios en su especificidad no debe conducir a su utilización parcial y errónea, como ocurriría si se invocase como un elemento desarticulado y desconectado con respecto de todos los demás. La misma profundización teórica y aplicación práctica de uno solo de los principios sociales, muestran con claridad su mutua conexión, reciprocidad y complementariedad. Estos fundamentos de la doctrina de la Iglesia representan un patrimonio permanente de reflexión, que es parte esencial del mensaje cristiano; pero van mucho más allá, ya que indican a todos las vías posibles para edificar una vida social buena, auténticamente renovada.³⁴⁵

163 Los principios de la doctrina social, en su conjunto, constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con las demás, en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos. En efecto, el hombre no puede evadir la cuestión de la verdad y del sentido de la vida social, ya que la sociedad no es una realidad extraña a su misma existencia.

Estos principios tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos

y ordenadores de la vida social. Para su plena comprensión, es necesario actuar en la dirección que señalan, por la vía que indican para el desarrollo de una vida digna del hombre. La exigencia moral insita en los grandes principios sociales concierne tanto el actuar personal de los individuos, como primeros e insustituibles sujetos responsables de la vida social a cualquier nivel, cuanto de igual modo las instituciones, representadas por leyes, normas de costumbre y estructuras civiles, a causa de su capacidad de influir y condicionar las opciones de muchos y por mucho tiempo. Los principios recuerdan, en efecto, que la sociedad históricamente existente surge del entrelazarse de las libertades de todas las personas que en ella interactúan, contribuyendo, mediante sus opciones, a edificarla o a empobrecerla.

II. EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN

a) Significado y aplicaciones principales

164 De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende « el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección ».³⁴⁶

El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral.

165 Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere

positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre.³⁴⁷ La persona no puede encontrar realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser « con » y « para » los demás. Esta verdad le impone no una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante, de manera práctica y no sólo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva de la sociabilidad –desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, la empresa de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos y de las Naciones– puede eludir la cuestión acerca del propio bien común, que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia.³⁴⁸

b) La responsabilidad de todos por el bien común

166 Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales.³⁴⁹ Tales exigencias atañen, ante todo, al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa.³⁵⁰ Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional, en vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones.³⁵¹

167 El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en

su consecución y desarrollo.³⁵² El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre,³⁵³ pero es un bien arduo de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio.

Todos tienen también derecho a gozar de las condiciones de vida social que resultan de la búsqueda del bien común. Sigue siendo actual la enseñanza de Pío XI: es « necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados ». ³⁵⁴

c) Las tareas de la comunidad política

168 La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política.³⁵⁵ El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión,³⁵⁶ de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo; de ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios – materiales, culturales, morales, espirituales– para gozar de una vida auténticamente humana. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable.³⁵⁷

169 Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales.³⁵⁸

La correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías.

170 El bien común de la sociedad no es un fin autárquico; tiene valor sólo en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. Dios es el fin último de sus criaturas y por ningún motivo puede privarse al bien común de su dimensión trascendente, que excede y, al mismo tiempo, da cumplimiento a la dimensión histórica.³⁵⁹ Esta perspectiva alcanza su plenitud a la luz de la fe en la Pascua de Jesús, que ilumina en plenitud la realización del verdadero bien común de la humanidad. Nuestra historia —el esfuerzo personal y colectivo para elevar la condición humana— comienza y culmina en Jesús: gracias a Él, por medio de Él y en vista de Él, toda realidad, incluida la sociedad humana, puede ser conducida a su Bien supremo, a su cumplimiento. Una visión puramente histórica y materialista terminaría por transformar el bien común en un simple bienestar socioeconómico, carente de finalidad trascendente, es decir, de su más profunda razón de ser.^{IV}

IV. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD

a) Origen y significado

185 La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social.³⁹⁵ Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo,

profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social.³⁹⁶ Es éste el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la « subjetividad creativa del ciudadano ».³⁹⁷ La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad.³⁹⁸

186 La exigencia de tutelar y de promover las expresiones originarias de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica «*Quadragesimo anno*», en la que el principio de subsidiaridad se indica como principio importantísimo de la « filosofía social »: « Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos ».³⁹⁹

Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda («*subsidium*») —por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital.

A la subsidiaridad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicaciones en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto

restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas.

b) Indicaciones concretas

187 El principio de subsidiaridad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. La experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa.

Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público: « Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos ».400 La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiaridad.

A la actuación del principio de subsidiaridad corresponden: el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien común; la articulación pluralista de

la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada responsabilización del ciudadano para « ser parte » activa de la realidad política y social del país.

188 Diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite una función de suplencia.⁴⁰¹ Piénsese, por ejemplo, en las situaciones donde es necesario que el Estado mismo promueva la economía, a causa de la imposibilidad de que la sociedad civil asuma autónomamente la iniciativa; piénsese también en las realidades de grave desequilibrio e injusticia social, en las que sólo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, de justicia y de paz. A la luz del principio de subsidiaridad, sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación sólo en lo excepcional de la situación. En todo caso, el bien común correctamente entendido, cuyas exigencias no deberán en modo alguno estar en contraste con la tutela y la promoción del primado de la persona y de sus principales expresiones sociales, deberá permanecer como el criterio de discernimiento acerca de la aplicación del principio de subsidiaridad.

V. LA PARTICIPACIÓN

a) Significado y valor

189 Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación,⁴⁰² que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece.⁴⁰³ La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común.⁴⁰⁴

La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento, sobre todo humano, en ámbitos como el mundo del trabajo y de las actividades económicas en sus dinámicas internas,⁴⁰⁵ la información y la cultura y, muy especialmente, la vida social y política hasta los niveles más altos, como son aquellos de los que depende la colaboración de todos los pueblos en la edificación de una comunidad internacional solidaria.⁴⁰⁶ Desde esta perspectiva, se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo, de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos; es necesario, además, un fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común.

b) Participación y democracia

190 La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos,⁴⁰⁷ además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa.⁴⁰⁸ Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla.

191 La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones: para ello, se debe prestar particular atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería actuarse verdaderamente. La superación de los obstáculos

culturales, jurídicos y sociales que con frecuencia se interponen, como verdaderas barreras, a la participación solidaria de los ciudadanos en los destinos de la propia comunidad, requiere una obra informativa y educativa.⁴⁰⁹ Una consideración cuidadosa merecen, en este sentido, todas las posturas que llevan al ciudadano a formas de participación insuficientes o incorrectas, y al difundido desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la vida social y política: piénsese, por ejemplo, en los intentos de los ciudadanos de « contratar » con las instituciones las condiciones más ventajosas para sí mismos, casi como si éstas estuviesen al servicio de las necesidades egoístas; y en la praxis de limitarse a la expresión de la opción electoral, llegando aun en muchos casos, a abstenerse.⁴¹⁰

En el ámbito de la participación, una ulterior fuente de preocupación proviene de aquellos países con un régimen totalitario o dictatorial, donde el derecho fundamental a participar en la vida pública es negado de raíz, porque se considera una amenaza para el Estado mismo; ⁴¹¹ de los países donde este derecho es enunciado sólo formalmente, sin que se pueda ejercer concretamente; y también de aquellos otros donde el crecimiento exagerado del aparato burocrático niega de hecho al ciudadano la posibilidad de proponerse como un verdadero actor de la vida social y política.⁴¹²

VI. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

a) Significado y valor

192 La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos, que se manifiesta a todos los niveles.⁴¹³ La vertiginosa multiplicación de las vías y de los medios de comunicación « en tiempo real

», como las telecomunicaciones, los extraordinarios progresos de la informática, el aumento de los intercambios comerciales y de las informaciones son testimonio de que por primera vez desde el inicio de la historia de la humanidad ahora es posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aun entre personas lejanas o desconocidas.

Junto al fenómeno de la interdependencia y de su constante dilatación, persisten, por otra parte, en todo el mundo, fortísimas desigualdades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, alimentadas también por diversas formas de explotación, de opresión y de corrupción, que influyen negativamente en la vida interna e internacional de muchos Estados. El proceso de aceleración de la interdependencia entre las personas y los pueblos debe estar acompañado por un crecimiento en el plano ético- social igualmente intenso, para así evitar las nefastas consecuencias de una situación de injusticia de dimensiones planetarias, con repercusiones negativas incluso en los mismos países actualmente más favorecidos.⁴¹⁴

b) La solidaridad como principio social y como virtud moral

¹⁹³ Las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos, que son, de hecho, formas de solidaridad, deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral ínsita en todas las relaciones humanas. La solidaridad se presenta, por tanto, bajo dos aspectos complementarios: como principio social ⁴¹⁵ y como virtud moral.⁴¹⁶

La solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el cual las « estructuras de pecado », ⁴¹⁷ que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado, ordenamientos.

La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no « un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos ». ⁴¹⁸ La solidaridad se eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común, y en « la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el propio provecho (cf. Mt 10,40-42; 20, 25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-27) ». ⁴¹⁹

c) Solidaridad y crecimiento común de los hombres

¹⁹⁴ El mensaje de la doctrina social acerca de la solidaridad pone en evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, solidaridad y paz en el mundo.⁴²⁰ El término « solidaridad », ampliamente empleado por el Magisterio,⁴²¹ expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y particularismo.⁴²²

¹⁹⁵ El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos: son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio, indivisible e indispensable,

constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes materiales e inmateriales, y todo aquello que la actividad humana ha producido. Semejante deuda se salda con las diversas manifestaciones de la actuación social, de manera que el camino de los hombres no se interrumpa, sino que permanezca abierto para las generaciones presentes y futuras, llamadas unas y otras a compartir, en la solidaridad, el mismo don.

d) La justicia

201 La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal.⁴⁴¹ Según su formulación más clásica, « consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido ».⁴⁴² Desde el punto de vista subjetivo, la justicia se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto de vista objetivo, constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social.⁴⁴³

El Magisterio social invoca el respeto de las formas clásicas de la justicia: la conmutativa, la distributiva y la legal.⁴⁴⁴ Un relieve cada vez mayor ha adquirido en el Magisterio la justicia social,⁴⁴⁵ que representa un verdadero y propio desarrollo de la justicia general, reguladora de las relaciones sociales según el criterio de la observancia de la ley. La justicia social es una exigencia vinculada con la cuestión social, que hoy se manifiesta con una dimensión mundial; concierne a los aspectos sociales, políticos y económicos y, sobre todo, a la dimensión estructural de los problemas y las soluciones correspondientes.⁴⁴⁶

202 La justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazado por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de la utilidad y del tener. La justicia, conforme a estos criterios, es considerada de forma reducida, mientras que

adquiere un significado más pleno y auténtico en la antropología cristiana. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana, porque lo que es « justo » no está determinado originariamente por la ley, sino por la identidad profunda del ser humano.⁴⁴⁷

203 La plena verdad sobre el hombre permite superar la visión contractual de la justicia, que es una visión limitada, y abrirla al horizonte de la solidaridad y del amor: « Por sí sola, la justicia no basta. Más aún, puede llegar a negarse a sí misma, si no se abre a la fuerza más profunda que es el amor ».⁴⁴⁸ En efecto, junto al valor de la justicia, la doctrina social coloca el de la solidaridad, en cuanto vía privilegiada de la paz. Si la paz es fruto de la justicia, « hoy se podría decir, con la misma exactitud y análoga fuerza de inspiración bíblica (cf. Is 32,17; St 32,17), *Opus solidaritatis pax*, la paz como fruto de la solidaridad ».⁴⁴⁹ La meta de la paz, en efecto, « sólo se alcanzará con la realización de la justicia social e internacional, y además con la práctica de las virtudes que favorecen la convivencia y nos enseñan a vivir unidos, para construir juntos, dando y recibiendo, una sociedad nueva y un mundo mejor ».⁴⁵⁰

III. LA AUTORIDAD POLÍTICA

a) El fundamento de la autoridad política

393 La Iglesia se ha confrontado con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre cuidado de defender y proponer un modelo fundado en la naturaleza social de las personas: « En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; una autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor ».⁷⁹⁹ La autoridad política es por tanto necesaria,⁸⁰⁰ en razón de las tareas que se le asignan y debe

ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil.⁸⁰¹

394 La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La autoridad política es el instrumento de coordinación y de dirección mediante el cual los particulares y los cuerpos intermedios se deben orientar hacia un orden cuyas relaciones, instituciones y procedimientos estén al servicio del crecimiento humano integral. El ejercicio de la autoridad política, en efecto, « así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común —concebido dinámicamente— según el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer ». ⁸⁰²

395 El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación.⁸⁰³ El solo consenso popular, sin embargo, no es suficiente para considerar justas las modalidades del ejercicio de la autoridad política.

b) La autoridad como fuerza moral

396 La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral: toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral,⁸⁰⁴ « que tiene a Dios como primer principio y último fin ». ⁸⁰⁵ En razón de la necesaria

referencia a este orden, que la precede y la funda, de sus finalidades y destinatarios, la autoridad no puede ser entendida como una fuerza determinada por criterios de carácter puramente sociológico e histórico: « Hay, en efecto, quienes osan negar la existencia de una ley moral objetiva, superior a la realidad externa y al hombre mismo, absolutamente necesaria y universal y, por último, igual para todos. Por esto, al no reconocer los hombres una única ley de justicia con valor universal, no pueden llegar en nada a un acuerdo pleno y seguro ». ⁸⁰⁶ En este orden, « si se niega la idea de Dios, esos preceptos necesariamente se desintegran por completo ». ⁸⁰⁷ Precisamente de este orden proceden la fuerza que la autoridad tiene para obligar ⁸⁰⁸ y su legitimidad moral; ⁸⁰⁹ no del arbitrio o de la voluntad de poder,⁸¹⁰ y tiene el deber de traducir este orden en acciones concretas para alcanzar el bien común.⁸¹¹

397 La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. Estos son innatos, « derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir ». ⁸¹² Estos valores no se fundan en « mayorías » de opinión, provisionales y mudables, sino que deben ser simplemente reconocidos, respetados y promovidos como elementos de una ley moral objetiva, ley natural inscrita en el corazón del hombre (cf. Rm 2,15), y punto de referencia normativo de la misma ley civil.⁸¹³ Si, a causa de un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el escepticismo lograra poner en duda los principios fundamentales de la ley moral,⁸¹⁴ el mismo ordenamiento estatal quedaría desprovisto de sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación pragmática de los diversos y contrapuestos intereses.⁸¹⁵

398 La autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón: « En tanto la ley humana es tal en cuanto es conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. Cuando por el contrario una ley está en contraste con la

razón, se le denomina ley inicua; en tal caso cesa de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia ».816 La autoridad que gobierna según la razón pone al ciudadano en relación no tanto de sometimiento con respecto a otro hombre, cuanto más bien de obediencia al orden moral y, por tanto, a Dios mismo que es su fuente última.817 Quien rechaza obedecer a la autoridad que actúa según el orden moral « se rebela contra el orden divino » (Rm 13,2).818 Análogamente la autoridad pública, que tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios,819 si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por ello mismo se hace ilegítima.

c) El derecho a la objeción de conciencia

399 El ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio.820 Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia: cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negarse.821 Además de ser un deber moral, este rechazo es también un derecho humano elemental que, precisamente por ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger: « Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional ».822

Es un grave deber de conciencia no prestar colaboración, ni siquiera formal, a aquellas prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con la ley de Dios. Tal cooperación, en efecto, no puede ser jamás justificada, ni invocando el respeto de la libertad de otros, ni apoyándose en el hecho de que es prevista y requerida por la ley civil. Nadie puede sustraerse jamás a la responsabilidad moral de los actos realizados y sobre esta responsabilidad cada uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 2,6; 14,12).

d) El derecho de resistencia

400 Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural. Santo Tomás de Aquino escribe que « se está obligado a obedecer ... por cuanto lo exige el orden de la justicia ».823 El fundamento del derecho de resistencia es, pues, el derecho de naturaleza.

Las expresiones concretas que la realización de este derecho puede adoptar son diversas. También pueden ser diversos los fines perseguidos. La resistencia a la autoridad se propone confirmar la validez de una visión diferente de las cosas, ya sea cuando se busca obtener un cambio parcial, por ejemplo, modificando algunas leyes, ya sea cuando se lucha por un cambio radical de la situación.

401 La doctrina social indica los criterios para el ejercicio del derecho de resistencia: « La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores ».824 La lucha armada debe considerarse un remedio extremo para poner fin a una « tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país ».825 La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, « más conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito ».826

e) Infligir las penas

402 Para tutelar el bien común, la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de conminar

penas proporcionadas a la gravedad de los delitos.⁸²⁷ El Estado tiene la doble tarea de reprimir los comportamientos lesivos de los derechos del hombre y de las reglas fundamentales de la convivencia civil, y remediar, mediante el sistema de las penas, el desorden causado por la acción delictiva. En el Estado de Derecho, el poder de infligir penas queda justamente confiado a la Magistratura: « Las Constituciones de los Estados modernos, al definir las relaciones que deben existir entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, garantizan a este último la independencia necesaria en el ámbito de la ley ». ⁸²⁸

403 La pena no sirve únicamente para defender el orden público y garantizar la seguridad de las personas; ésta se convierte, además, en instrumento de corrección del culpable, una corrección que asume también el valor moral de expiación cuando el culpable acepta voluntariamente su pena.⁸²⁹ La finalidad a la que tiende es doble: por una parte, favorecer la reinserción de las personas condenadas; por otra parte, promover una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal.

En este campo, es importante la actividad que los capellanes de las cárceles están llamados a desempeñar, no sólo desde el punto de vista específicamente religioso, sino también en defensa de la dignidad de las personas detenidas. Lamentablemente, las condiciones en que éstas cumplen su pena no favorecen siempre el respeto de su dignidad. Con frecuencia las prisiones se convierten incluso en escenario de nuevos crímenes. El ambiente de los Institutos Penitenciarios ofrece, sin embargo, un terreno privilegiado para dar testimonio, una vez más, de la solicitud cristiana en el campo social: « Estaba... en la cárcel y vinisteis a verme » (Mt 25,35-36).

404 La actividad de los entes encargados de la averiguación de la responsabilidad penal, que es siempre de carácter personal, ha de tender a la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de ejercer con respeto pleno de la dignidad y de los derechos

de la persona humana: se trata de garantizar los derechos tanto del culpable como del inocente. Se debe tener siempre presente el principio jurídico general en base al cual no se puede aplicar una pena si antes no se ha probado el delito.

En la realización de las averiguaciones se debe observar escrupulosamente la regla que prohíbe la práctica de la tortura, aun en el caso de los crímenes más graves: « El discípulo de Cristo rechaza todo recurso a tales medios, que nada es capaz de justificar y que envilecen la dignidad del hombre, tanto en quien es la víctima como en quien es su verdugo ». ⁸³⁰ Los instrumentos jurídicos internacionales que velan por los derechos del hombre indican justamente la prohibición de la tortura como un principio que no puede ser derogado en ninguna circunstancia.

Queda excluido además « el recurso a una detención motivada sólo por el intento de obtener noticias significativas para el proceso ». ⁸³¹ También, se ha de asegurar « la rapidez de los procesos: una duración excesiva de los mismos resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en una verdadera injusticia ». ⁸³²

Los magistrados están obligados a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones para no violar el derecho a la intimidad de los indagados y para no debilitar el principio de la presunción de inocencia. Puesto que también un juez puede equivocarse, es oportuno que la legislación establezca una justa indemnización para las víctimas de los errores judiciales.

405 La Iglesia ve como un signo de esperanza « la aversión cada vez más difundida en la opinión pública a la pena de muerte, incluso como instrumento de "legítima defensa" social, al considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse ». ⁸³³ Aun cuando la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluya — supuesta la plena comprobación de la identidad y de

la responsabilidad del culpable— la pena de muerte « si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas »,834 los métodos incruentos de represión y castigo son preferibles, ya que « corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana ».835 El número creciente de países que adoptan disposiciones para abolir la pena de muerte o para suspender su aplicación es también una prueba de que los casos en los cuales es absolutamente necesario eliminar al reo « son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes ».836 La creciente aversión de la opinión pública a la pena de muerte y las diversas disposiciones que tienden a su abolición o a la suspensión de su aplicación, constituyen manifestaciones visibles de una mayor sensibilidad moral.

PREGUNTAS

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Consejo Pontificio Mexicano

1

Según la Doctrina Social de la Iglesia, ¿cuál es el papel de la dignidad humana en la promoción de la justicia social y los derechos fundamentales?

2

¿Cuáles son los principios éticos y morales presentados en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia para abordar las desigualdades económicas y la distribución justa de los recursos?

3

¿Cómo aborda la Doctrina Social de la Iglesia la cuestión del trabajo humano y su relación con la dignidad y los derechos de los trabajadores?

4

¿Cuáles son las implicaciones éticas y sociales de la opción preferencial por los pobres y los marginados, según se presenta en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia?

5

¿Cuál es la visión de la Doctrina Social de la Iglesia sobre la responsabilidad de los individuos y las instituciones en la construcción de una sociedad justa y solidaria?



Compendium of the Social Doctrine of the Church

PREAMBLE

Compendium of the Social Doctrine of the Church by the Mexican Pontifical Council

In a world marked by complex challenges and an ongoing search for balance, we are faced with the need to comprehend and apply the fundamental principles of the Social Doctrine of the Church. Through this compendium, elaborated by the Mexican Pontifical Council, we will explore the essential pillars that guide our reflections on Human Rights, the Common Good, the principle of Subsidiarity, Participation, Solidarity, and Political Authority.

First and foremost, Human Rights emerge as an undeniable moral compass, demanding the respect and promotion of the inherent dignity of every individual. This compendium invites us to delve deeper into the understanding of fundamental rights and their connection to justice, freedom, and responsibility. It opens us to the importance of safeguarding and ensuring these rights for a just and equitable society.

The Common Good, on the other hand, stands as a shared objective that transcends individual interests, urging us to seek the integral development of all individuals and communities. This compendium leads us to reflect on the significance of solidarity and fraternity as foundations for constructing a more just world. One where equitable access to material and spiritual goods necessary for personal growth is promoted.

The principle of Subsidiarity, another fundamental pillar of this Social Doctrine, encourages us to recognize and promote the autonomy and responsibility of distinct spheres within society. In this compendium, we are invited to value the

importance of appropriately distributing functions and roles in decision-making processes. This fosters the active participation of all social actors while avoiding an excessive concentration of power.

Likewise, the compendium introduces us to the notion of Participation as both a right and a duty for all members of society. Through its reading, we grasp the significance of citizen participation and its contribution to strengthening democracy and fostering constructive dialogue among diverse sectors of society.

Solidarity, in turn, is revealed as an essential value that compels us to acknowledge our interdependence and act for the benefit of others. In this compendium, we are encouraged to reflect on solidarity as a virtue that prompts us to share resources and promote concrete actions in favor of those in need. This way, we build a more humane and just social fabric.

Lastly, the compendium prompts us to consider Political Authority as a service to the common good, guided by ethics and responsibility towards society as a whole. We will explore the importance of leaders exercising their leadership with integrity, promoting the well-being of all and generating policies and structures that encourage justice and integral development.

Through this reading of the Compendium of the Social Doctrine of the Church, we embark on a journey of reflection and discernment. Our goal is to enrich our understanding of Human Rights, the Common Good, the principle of Subsidiarity, Participation, Solidarity, and Political Authority. May this exploration inspire us to build a more just, compassionate, and committed society that fosters the comprehensive well-being of every individual and community.

Compendium of the Social Doctrine of the Church Mexican Pontifical Council

IV. HUMAN RIGHTS

a. The value of human rights

152. The movement towards the identification and proclamation of human rights is one of the most significant attempts to respond effectively to the inescapable demands of human dignity[302]. The Church sees in these rights the extraordinary opportunity that our modern times offer, through the affirmation of these rights, for more effectively recognizing human dignity and universally promoting it as a characteristic inscribed by God the Creator in his creature[303]. The Church's Magisterium has not failed to note the positive value of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations on 10 December 1948, which Pope John Paul II defined as "a true milestone on the path of humanity's moral progress"[304].

153. In fact, the roots of human rights are to be found in the dignity that belongs to each human being[305]. This dignity, inherent in human life and equal in every person, is perceived and understood first of all by reason. The natural foundation of rights appears all the more solid when, in light of the supernatural, it is considered that human dignity, after having been given by God and having been profoundly wounded by sin, was taken on and redeemed by Jesus Christ in his incarnation, death and resurrection[306].

The ultimate source of human rights is not found in the mere will of human beings[307], in the reality of the State, in public powers, but in man himself and in God his Creator. These rights are "universal, inviolable, inalienable"[308]. Universal because they are present in all human beings, without exception of time, place or subject. Inviolable insofar as "they are inherent in the human person and in human dignity"[309] and because "it would be vain to proclaim rights, if at the same time everything were

not done to ensure the duty of respecting them by all people, everywhere, and for all people"[310]. Inalienable insofar as "no one can legitimately deprive another person, whoever they may be, of these rights, since this would do violence to their nature"[311].

154. Human rights are to be defended not only individually but also as a whole: protecting them only partially would imply a kind of failure to recognize them. They correspond to the demands of human dignity and entail, in the first place, the fulfilment of the essential needs of the person in the material and spiritual spheres. "These rights apply to every stage of life and to every political, social, economic and cultural situation. Together they form a single whole, directed unambiguously towards the promotion of every aspect of the good of both the person and society ... The integral promotion of every category of human rights is the true guarantee of full respect for each individual right".[312] Universality and indivisibility are distinctive characteristics of human rights: they are "two guiding principles which at the same time demand that human rights be rooted in each culture and that their juridical profile be strengthened so as to ensure that they are fully observed"[313].

b. The specification of rights

155. The teachings of Pope John XXIII,[314] the Second Vatican Council,[315] and Pope Paul VI [316] have given abundant indication of the concept of human rights as articulated by the Magisterium. Pope John Paul II has drawn up a list of them in the Encyclical *Centesimus Annus*: "the right to life, an integral part of which is the right of the child to develop in the mother's womb from the moment of conception; the right to live in a united family and in a moral environment conducive to the growth of the child's personality; the right to develop one's intelligence and freedom in seeking and knowing the truth; the right to share in the work which makes wise use of the earth's material resources, and to derive from that work the means to support oneself and

one's dependents; and the right freely to establish a family, to have and to rear children through the responsible exercise of one's sexuality. In a certain sense, the source and synthesis of these rights is religious freedom, understood as the right to live in the truth of one's faith and in conformity with one's transcendent dignity as a person"[317].

The first right presented in this list is the right to life, from conception to its natural end,[318] which is the condition for the exercise of all other rights and, in particular, implies the illicitness of every form of procured abortion and of euthanasia.[319] Emphasis is given to the paramount value of the right to religious freedom: "all men are to be immune from coercion on the part of individuals or of social groups and of any human power, in such wise that no one is to be forced to act in a manner contrary to his own beliefs, whether privately or publicly, whether alone or in association with others, within due limits". [320] The respect of this right is an indicative sign of "man's authentic progress in any regime, in any society, system or milieu"[321].

c. Rights and duties

156. Inextricably connected to the topic of rights is the issue of the duties falling to men and women, which is given appropriate emphasis in the interventions of the Magisterium. The mutual complementarities between rights and duties – they are indissolubly linked – are recalled several times, above all in the human person who possesses them. [322] This bond also has a social dimension: "in human society to one man's right there corresponds a duty in all other persons: the duty, namely, of acknowledging and respecting the right in question". [323] The Magisterium underlines the contradiction inherent in affirming rights without acknowledging corresponding responsibilities. "Those, therefore, who claim their own rights, yet altogether forget or neglect to carry out their respective duties, are people who build with one hand and destroy with the other".[324]

d. Rights of peoples and nations

157. The field of human rights has expanded to include the rights of peoples and nations: [325] in fact, "what is true for the individual is also true for peoples".[326] The Magisterium points out that international law "rests upon the principle of equal respect for States, for each people's right to self-determination and for their free cooperation in view of the higher common good of humanity".[327] Peace is founded not only on respect for human rights but also on respect for the rights of peoples, in particular the right to independence.[328]

The rights of nations are nothing but "'human rights' fostered at the specific level of community life".[329] A nation has a "fundamental right to existence", to "its own language and culture, through which a people expresses and promotes ... its fundamental spiritual 'sovereignty'", to "shape its life according to its own traditions, excluding, of course, every abuse of basic human rights and in particular the oppression of minorities", to "build its future by providing an appropriate education for the younger generation".[330] The international order requires a balance between particularity and universality, which all nations are called to bring about, for their primary duty is to live in a posture of peace, respect and solidarity with other nations.

e. Filling in the gap between the letter and the spirit

158. The solemn proclamation of human rights is contradicted by a painful reality of violations, wars and violence of every kind, in the first place, genocides and mass deportations, the spreading on a virtual worldwide dimension of ever new forms of slavery such as trafficking in human beings, child soldiers, the exploitation of workers, illegal drug trafficking, prostitution. "Even in countries with democratic forms of government, these rights are not always fully respected".[331] Unfortunately, there is a gap between the "letter" and the "spirit" of human rights,[332] which can often be attributed to a merely formal recognition of these

rights. The Church's social doctrine, in consideration of the privilege accorded by the Gospel to the poor, repeats over and over that "the more fortunate should renounce some of their rights so as to place their goods more generously at the service of others" and that an excessive affirmation of equality "can give rise to an individualism in which each one claims his own rights without wishing to be answerable for the common good".[333]

159. The Church, aware that her essentially religious mission includes the defence and promotion of human rights,[334] "holds in high esteem the dynamic approach of today which is everywhere fostering these rights".[335] The Church profoundly experiences the need to respect justice [336] and human rights [337] within her own ranks.

This pastoral commitment develops in a twofold direction: in the proclamation of the Christian foundations of human rights and in the denunciation of the violations of these rights.[338] In any event, "proclamation is always more important than denunciation, and the latter cannot ignore the former, which gives it true solidity and the force of higher motivation".[339] For greater effectiveness, this commitment is open to ecumenical cooperation, to dialogue with other religions, to all appropriate contacts with other organizations, governmental and non-governmental, at the national and international levels. The Church trusts above all in the help of the Lord and his Spirit who, poured forth into human hearts, is the surest guarantee for respecting justice and human rights, and for contributing to peace. "The promotion of justice and peace and the penetration of all spheres of human society with the light and the leaven of the Gospel have always been the object of the Church's efforts in fulfilment of the Lord's command".[340]

CHAPTER FOUR

PRINCIPLES OF THE CHURCH'S SOCIAL DOCTRINE

I. MEANING AND UNITY

160. The permanent principles of the Church's social doctrine [341] constitute the very heart of Catholic social teaching. These are the principles of: the dignity of the human person, which has already been dealt with in the preceding chapter, and which is the foundation of all the other principles and content of the Church's social doctrine; [342] the common good; subsidiarity; and solidarity. These principles, the expression of the whole truth about man known by reason and faith, are born of "the encounter of the Gospel message and of its demands summarized in the supreme commandment of love of God and neighbour in justice with the problems emanating from the life of society".[343] In the course of history and with the light of the Spirit, the Church has wisely reflected within her own tradition of faith and has been able to provide an ever more accurate foundation and shape to these principles, progressively explaining them in the attempt to respond coherently to the demands of the times and to the continuous developments of social life.

161. These are principles of a general and fundamental character, since they concern the reality of society in its entirety: from close and immediate relationships to those mediated by politics, economics and law; from relationships among communities and groups to relations between peoples and nations. Because of their permanence in time and their universality of meaning, the Church presents them as the primary and fundamental parameters of reference for interpreting and evaluating social phenomena, which is the necessary source for working out the criteria for the discernment and orientation of social interactions in every area.

162. The principles of the Church's social doctrine

must be appreciated in their unity, interrelatedness and articulation. This requirement is rooted in the meaning that the Church herself attributes to her social doctrine, as a unified doctrinal corpus that interprets modern social realities in a systematic manner.[344] Examining each of these principles individually must not lead to using them only in part or in an erroneous manner, which would be the case if they were to be invoked in a disjointed and unconnected way with respect to each of the others. A deep theoretical understanding and the actual application of even just one of these social principles clearly shows the reciprocity, complementarities and interconnectedness that is part of their structure. These fundamental principles of the Church's social doctrine, moreover, represent much more than a permanent legacy of reflection, which is also an essential part of the Christian message, since they indicate the paths possible for building a good, authentic and renewed social life.[345]

163. The principles of the social doctrine, in their entirety, constitute that primary articulation of the truth of society by which every conscience is challenged and invited to interact with every other conscience in truth, in responsibility shared fully with all people and also regarding all people. In fact, man cannot avoid the question of freedom and of the meaning of life in society, since society is a reality that is neither external nor foreign to his being.

These principles have a profoundly moral significance because they refer to the ultimate and organizational foundations of life in society. To understand them completely it is necessary to act in accordance with them, following the path of development that they indicate for a life worthy of man. The ethical requirement inherent in these pre-eminent social principles concerns both the personal behaviour of individuals – in that they are the first and indispensable responsible subjects of social life at every level – and at the same time institutions represented by laws, customary norms and civil constructs, because of their capacity to influence and condition the choices of many people over a long period of time. In fact, these principles remind

us that the origins of a society existing in history are found in the interconnectedness of the freedoms of all the persons who interact within it, contributing by means of their choices either to build it up or to impoverish it.

II. THE PRINCIPLE OF THE COMMON GOOD

a. Meaning and primary implications

164. The principle of the common good, to which every aspect of social life must be related if it is to attain its fullest meaning, stems from the dignity, unity and equality of all people. According to its primary and broadly accepted sense, the common good indicates “the sum total of social conditions which allow people, either as groups or as individuals, to reach their fulfilment more fully and more easily”. [346]

The common good does not consist in the simple sum of the particular goods of each subject of a social entity. Belonging to everyone and to each person, it is and remains “common”, because it is indivisible and because only together is it possible to attain it, increase it and safeguard its effectiveness, with regard also to the future. Just as the moral actions of an individual are accomplished in doing what is good, so too the actions of a society attain their full stature when they bring about the common good. The common good, in fact, can be understood as the social and community dimension of the moral good.

165. A society that wishes and intends to remain at the service of the human being at every level is a society that has the common good – the good of all people and of the whole person [347] – as its primary goal. The human person cannot find fulfilment in himself, that is, apart from the fact that he exists “with” others and “for” others. This truth does not simply require that he live with others at various levels of social life, but that he seek unceasingly – in actual practice and not merely at the level of ideas – the good, that is, the meaning and truth,

found in existing forms of social life. No expression of social life – from the family to intermediate social groups, associations, enterprises of an economic nature, cities, regions, States, up to the community of peoples and nations – can escape the issue of its own common good, in that this is a constitutive element of its significance and the authentic reason for its very existence[348].

b. Responsibility of everyone for the common good

166. The demands of the common good are dependent on the social conditions of each historical period and are strictly connected to respect for and the integral promotion of the person and his fundamental rights[349]. These demands concern above all the commitment to peace, the organization of the State's powers, a sound juridical system, the protection of the environment, and the provision of essential services to all, some of which are at the same time human rights: food, housing, work, education and access to culture, transportation, basic health care, the freedom of communication and expression, and the protection of religious freedom[350]. Nor must one forget the contribution that every nation is required in duty to make towards a true worldwide cooperation for the common good of the whole of humanity and for future generations also[351].

167. The common good therefore involves all members of society, no one is exempt from cooperating, according to each one's possibilities, in attaining it and developing it[352]. The common good must be served in its fullness, not according to reductionist visions that are subordinated by certain people to their advantages; own rather it is to be based on a logic that leads to the assumption of greater responsibility. The common good corresponds to the highest of human instincts[353], but it is a good that is very difficult to attain because it requires the constant ability and effort to seek the good of others as though it were one's own good.

Everyone also has the right to enjoy the conditions of

social life that are brought about by the quest for the common good. The teaching of Pope Pius XI is still relevant: "the distribution of created goods, which, as every discerning person knows, is labouring today under the gravest evils due to the huge disparity between the few exceedingly rich and the unnumbered propertyless, must be effectively called back to and brought into conformity with the norms of the common good, that is, social justice"[354].

c. Tasks of the political community

168. The responsibility for attaining the common good, besides falling to individual persons, belongs also to the State, since the common good is the reason that the political authority exists[355]. The State, in fact, must guarantee the coherency, unity and organization of the civil society of which it is an expression[356], in order that the common good may be attained with the contribution of every citizen. The individual person, the family or intermediate groups are not able to achieve their full development by themselves for living a truly human life. Hence the necessity of political institutions, the purpose of which is to make available to persons the necessary material, cultural, moral and spiritual goods. The goal of life in society is in fact the historically attainable common good[357].

169. To ensure the common good, the government of each country has the specific duty to harmonize the different sectoral interests with the requirements of justice[358]. The proper reconciling of the particular goods of groups and those of individuals is, in fact, one of the most delicate tasks of public authority. Moreover, it must not be forgotten that in the democratic State, where decisions are usually made by the majority of representatives elected by the people, those responsible for government are required to interpret the common good of their country not only according to the guidelines of the majority but also according to the effective good of all the members of the community, including the minority.

170. The common good of society is not an end in itself; it has value only in reference to attaining the ultimate ends of the person and the universal common good of the whole of creation. God is the ultimate end of his creatures and for no reason may the common good be deprived of its transcendent dimension, which moves beyond the historical dimension while at the same time fulfilling it[359]. This perspective reaches its fullness by virtue of faith in Jesus' Passover, which sheds clear light on the attainment of humanity's true common good. Our history – the personal and collective effort to elevate the human condition – begins and ends in Jesus: thanks to him, by means of him and in light of him every reality, including human society, can be brought to its Supreme Good, to its fulfilment. A purely historical and materialistic vision would end up transforming the common good into a simple socio-economic well-being, without any transcendental goal, that is, without its most intimate reason for existing.

IV. THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY

a. Origin and meaning

185. Subsidiarity is among the most constant and characteristic directives of the Church's social doctrine and has been present since the first great social encyclical[395]. It is impossible to promote the dignity of the person without showing concern for the family, groups, associations, local territorial realities; in short, for that aggregate of economic, social, cultural, sports-oriented, recreational, professional and political expressions to which people spontaneously give life and which make it possible for them to achieve effective social growth[396]. This is the realm of civil society, understood as the sum of the relationships between individuals and intermediate social groupings, which are the first relationships to arise and which come about thanks to "the creative subjectivity of the citizen"[397]. This network of relationships strengthens the social fabric and constitutes the basis of a true community of persons, making possible the recognition of higher

forms of social activity[398].

186. The necessity of defending and promoting the original expressions of social life is emphasized by the Church in the Encyclical *Quadragesimo Anno*, in which the principle of subsidiarity is indicated as a most important principle of "social philosophy". "Just as it is gravely wrong to take from individuals what they can accomplish by their own initiative and industry and give it to the community, so also it is an injustice and at the same time a grave evil and disturbance of right order to assign to a greater and higher association what lesser and subordinate organizations can do. For every social activity ought of its very nature to furnish help to the members of the body social, and never destroy and absorb them"[399].

On the basis of this principle, all societies of a superior order must adopt attitudes of help ("subsidium") – therefore of support, promotion, development – with respect to lower-order societies. In this way, intermediate social entities can properly perform the functions that fall to them without being required to hand them over unjustly to other social entities of a higher level, by which they would end up being absorbed and substituted, in the end seeing themselves denied their dignity and essential place.

Subsidiarity, understood in the positive sense as economic, institutional or juridical assistance offered to lesser social entities, entails a corresponding series of negative implications that require the State to refrain from anything that would de facto restrict the existential space of the smaller essential cells of society. Their initiative, freedom and responsibility must not be supplanted.

b. Concrete indications

187. The principle of subsidiarity protects people from abuses by higher-level social authority and calls on these same authorities to help individuals and intermediate groups to fulfil their duties. This principle is imperative because every person, family

and intermediate group has something original to offer to the community. Experience shows that the denial of subsidiarity, or its limitation in the name of an alleged democratization or equality of all members of society, limits and sometimes even destroys the spirit of freedom and initiative.

The principle of subsidiarity is opposed to certain forms of centralization, bureaucratization, and welfare assistance and to the unjustified and excessive presence of the State in public mechanisms. "By intervening directly and depriving society of its responsibility, the Social Assistance State leads to a loss of human energies and an inordinate increase of public agencies, which are dominated more by bureaucratic ways of thinking than by concern for serving their clients, and which are accompanied by an enormous increase in spending"[400]. An absent or insufficient recognition of private initiative – in economic matters also – and the failure to recognize its public function, contribute to the undermining of the principle of subsidiarity, as monopolies do as well.

In order for the principle of subsidiarity to be put into practice there is a corresponding need for: respect and effective promotion of the human person and the family; ever greater appreciation of associations and intermediate organizations in their fundamental choices and in those that cannot be delegated to or exercised by others; the encouragement of private initiative so that every social entity remains at the service of the common good, each with its own distinctive characteristics; the presence of pluralism in society and due representation of its vital components; safeguarding human rights and the rights of minorities; bringing about bureaucratic and administrative decentralization; striking a balance between the public and private spheres, with the resulting recognition of the social function of the private sphere; appropriate methods for making citizens more responsible in actively "being a part" of the political and social reality of their country.

188. Various circumstances may make it advisable that the State step in to supply certain functions[401].

One may think, for example, of situations in which it is necessary for the State itself to stimulate the economy because it is impossible for civil society to support initiatives on its own. One may also envision the reality of serious social imbalance or injustice where only the intervention of the public authority can create conditions of greater equality, justice and peace. In light of the principle of subsidiarity, however, this institutional substitution must not continue any longer than is absolutely necessary, since justification for such intervention is found only in the exceptional nature of the situation. In any case, the common good correctly understood, the demands of which will never in any way be contrary to the defence and promotion of the primacy of the person and the way this is expressed in society, must remain the criteria for making decisions concerning the application of the principle of subsidiarity.

V. PARTICIPATION

a. Meaning and value

189. The characteristic implication of subsidiarity is participation[402], which is expressed essentially in a series of activities by means of which the citizen, either as an individual or in association with others, whether directly or through representation, contributes to the cultural, economic, political and social life of the civil community to which he belongs[403]. Participation is a duty to be fulfilled consciously by all, with responsibility and with a view to the common good [404].

This cannot be confined or restricted to only a certain area of social life, given its importance for growth – above all human growth – in areas such as the world of work and economic activity, especially in their internal dynamics[405]; in the sectors of information and culture; and, more than anything else, in the fields of social and political life even at the highest levels. The cooperation of all peoples and the building of an international community in a framework of solidarity depends on this latter area[406]. In this perspective it becomes absolutely necessary to encourage

participation above all of the most disadvantaged, as well as the occasional rotation of political leaders in order to forestall the establishment of hidden privileges. Moreover, strong moral pressure is needed, so that the administration of public life will be the result of the shared responsibility of each individual with regard to the common good.

b. Participation and democracy

190. Participation in community life is not only one of the greatest aspirations of the citizen, called to exercise freely and responsibly his civic role with and for others[407], but is also one of the pillars of all democratic orders and one of the major guarantees of the permanence of the democratic system. Democratic government, in fact, is defined first of all by the assignment of powers and functions on the part of the people, exercised in their name, in their regard and on their behalf. It is therefore clearly evident that every democracy must be participative[408]. This means that the different subjects of civil community at every level must be informed, listened to and involved in the exercise of the carried-out functions.

191. Participation can be achieved in all the different relationships between the citizen and institutions: to this end, particular attention must be given to the historical and social contexts in which such participation can truly be brought about. The overcoming of cultural, juridical and social obstacles that often constitutes real barriers to the shared participation of citizens in the destiny of their communities' calls for work in the areas of information and education[409]. In this regard, all those attitudes that encourage in citizens an inadequate or incorrect practice of participation or that cause widespread disaffection with everything connected with the sphere of social and political life are a source of concern and deserve careful consideration. For example, one thinks of attempts by certain citizens to "make deals" with institutions in order to obtain more advantageous conditions for themselves, as though these institutions were at the

service of their selfish needs; or of the practice of citizens to limit their participation to the electoral process, in many cases reaching the point where they even abstain from voting[410].

In the area of participation, a further source of concern is found in those countries ruled by totalitarian or dictatorial regimes, where the fundamental right to participate in public life is denied at its origin, since it is considered a threat to the State itself[411]. In some countries where this right is only formally proclaimed while in reality it cannot be concretely exercised while, in still other countries the burgeoning bureaucracy de facto denies citizens the possibility of taking active part in social and political life[412].

VI. THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY

a. Meaning and value

192. Solidarity highlights in a particular way the intrinsic social nature of the human person, the equality of all in dignity and rights and the common path of individuals and peoples towards an ever more committed unity. Never before has there been such a widespread awareness of the bond of interdependence between individuals and peoples, which is found at every level[413]. The very rapid expansion in ways and means of communication "in real time", such as those offered by information technology, the extraordinary advances in computer technology, the increased volume of commerce and information exchange all bear witness to the fact that, for the first time since the beginning of human history, it is now possible – at least technically – to establish relationships between people who are separated by great distances and are unknown to each other.

In the presence of the phenomenon of interdependence and its constant expansion, however, there persist in every part of the world stark inequalities between developed and developing countries, inequalities stoked also by various forms of exploitation, oppression and corruption

that have a negative influence on the internal and international life of many States. The acceleration of interdependence between persons and peoples needs to be accompanied by equally intense efforts on the ethical-social plane, in order to avoid the dangerous consequences of perpetrating injustice on a global scale. This would have very negative repercussions even in the very countries that are presently more advantaged[414].

b. Solidarity as a social principle and a moral virtue

193. The new relationships of interdependence between individuals and peoples, which are de facto forms of solidarity, have to be transformed into relationships tending towards genuine ethical-social solidarity. This is a moral requirement inherent within all human relationships. Solidarity is seen therefore under two complementary aspects: that of a social principle[415] and that of a moral virtue[416].

Solidarity must be seen above all in its value as a moral virtue that determines the order of institutions. On the basis of this principle the “structures of sin”[417] that dominate relationships between individuals and peoples must be overcome. They must be purified and transformed into structures of solidarity through the creation or appropriate modification of laws, market regulations, and juridical systems.

Solidarity is also an authentic moral virtue, not a “feeling of vague compassion or shallow distress at the misfortunes of so many people, both near and far. On the contrary, it is a firm and persevering determination to commit oneself to the common good. That is to say to the good of all and of each individual, because we are all really responsible for all”[418]. Solidarity rises to the rank of fundamental social virtue since it places itself in the sphere of justice. It is a virtue directed par excellence to the common good, and is found in “a commitment to the good of one’s neighbour with the readiness, in the Gospel sense, to ‘lose oneself’ for the sake of the other instead of exploiting him, and to ‘serve him’ instead of oppressing him for one’s own advantage

(cf. Mt 10:40-42, 20:25; Mk 10:42-45; Lk 22:25-27)”[419].

c. Solidarity and the common growth of mankind

194. The message of the Church’s social doctrine regarding solidarity clearly shows that there exists an intimate bond between solidarity and the common good, between solidarity and the universal destination of goods, between solidarity and equality among men and peoples, between solidarity and peace in the world[420]. The term “solidarity”, widely used by the Magisterium[421], expresses in summary fashion the need to recognize in the composite ties that unite men and social groups among themselves, the space given to human freedom for common growth in which all share and in which they participate. The commitment to this goal is translated into the positive contribution of seeing that nothing is lacking in the common cause and also of seeking points of possible agreement where attitudes of separation and fragmentation prevail. It translates into the willingness to give oneself for the good of one’s neighbour, beyond any individual or particular interest[422].

195. The principle of solidarity requires that men and women of our day cultivate a greater awareness that they are debtors of the society of which they have become part. They are debtors because of those conditions that make human existence liveable, and because of the indivisible and indispensable legacy constituted by culture, scientific and technical knowledge, material and immaterial goods and by all that the human condition has produced. A similar debt must be recognized in the various forms of social interaction, so that humanity’s journey will not be interrupted but remain open to present and future generations, all of them called together to share the same gift in solidarity.

d. Justice

201. Justice is a value that accompanies the exercise of the corresponding cardinal moral virtue[441].

According to its most classic formulation, it “consists in the constant and firm will to give their due to God and neighbour”[442]. From a subjective point of view, justice is translated into behaviour that is based on the will to recognize the other as a person, while, from an objective point of view, it constitutes the decisive criteria of morality in the intersubjective and social sphere[443].

The Church’s social Magisterium constantly calls for the most classical forms of justice to be respected: commutative, distributive and legal justice[444]. Ever greater importance has been given to social justice[445], which represents a real development in general justice, the justice that regulates social relationships according to the criterion of observance of the law. Social justice, a requirement related to the social question which today is worldwide in scope, concerns the social, political and economic aspects and, above all, the structural dimension of problems and their respective solutions[446].

202. Justice is particularly important in the present-day context, where the individual value of the person, his dignity and his rights — despite proclaimed intentions — are seriously threatened by the widespread tendency to make exclusive use of criteria of utility and ownership. Justice too, on the basis of these criteria, is considered in a reductionist manner, whereas it acquires a fuller and more authentic meaning in Christian anthropology. Justice, in fact, is not merely a simple human convention, because what is “just” is not first determined by the law but by the profound identity of the human being[447].

203. The full truth about man makes it possible to move beyond a contractualistic vision of justice, which is a reductionist vision, and to open up also for justice the new horizon of solidarity and love. “By itself, justice is not enough. Indeed, it can even betray itself, unless it is open to that deeper power which is love”[448]. In fact, the Church’s social doctrine places alongside the value of justice that of solidarity, in that it is the privileged way of peace. If peace is the fruit of justice, “today one could say, with the same exactness and the same power of biblical

inspiration (cf. Is 32:17; Jas 3:18): Opus solidaritatis pax, peace as the fruit of solidarity”[449]. The goal of peace, in fact, “will certainly be achieved through the putting into effect of social and international justice, but also through the practice of the virtues which favour togetherness, and which teach us to live in unity, so as to build in unity, by giving and receiving, a new society and a better world”[450].

III. POLITICAL AUTHORITY

a. The foundation of political authority

393. The Church has always considered different ways of understanding authority, taking care to defend and propose a model of authority that is founded on the social nature of the person. “Since God made men social by nature, and since no society can hold together unless some one be over all, directing all to strive earnestly for the common good, every civilized community must have a ruling authority, and this authority, no less than society itself, has its source in nature, and has, consequently, God for its author”. [799] Political authority is therefore necessary [800] because of the responsibilities assigned to it. Political authority is and must be a positive and irreplaceable component of civil life.[801]

394. Political authority must guarantee an ordered and upright community life without usurping the free activity of individuals and groups but disciplining and orienting this freedom, by respecting and defending the independence of the individual and social subjects, for the attainment of the common good. Political authority is an instrument of coordination and direction by means of which the many individuals and intermediate bodies must move towards an order in which relationships, institutions and procedures are put at the service of integral human growth. Political authority, in fact, “whether in the community as such or in institutions representing the State, must always be exercised within the limits of morality and on behalf of the dynamically conceived common good, according to a juridical order enjoying legal status. When such is

the case citizens are conscience-bound to obey". [802]

395. The subject of political authority is the people considered in its entirety as those who have sovereignty. In various forms, this people transfers the exercise of sovereignty to those whom it freely elects as its representatives, but it preserves the prerogative to assert this sovereignty in evaluating the work of those charged with governing and also in replacing them when they do not fulfil their functions satisfactorily. Although this right is operative in every State and in every kind of political regime, a democratic form of government, due to its procedures for verification, allows and guarantees its fullest application.[803] The mere consent of the people is not, however, sufficient for considering "just" the ways in which political authority is exercised.

b. Authority as moral force

396. Authority must be guided by the moral law. All of its dignity derives from its being exercised within the context of the moral order,[804] "which in turn has God for its first source and final end". [805] Because of its necessary reference to the moral order, which precedes it and is its basis, and because of its purpose and the people to whom it is directed, authority cannot be understood as a power determined by criteria of a solely sociological or historical character. "There are some indeed who go so far as to deny the existence of a moral order which is transcendent, absolute, universal and equally binding upon all. And where the same law of justice is not adhered to by all, men cannot hope to come to open and full agreement on vital issues". [806] This order "has no existence except in God; cut off from God it must necessarily disintegrate". [807] It is from the moral order that authority derives its power to impose obligations [808] and its moral legitimacy,[809] not from some arbitrary will or from the thirst for power,[810] and it is to translate this order into concrete actions to achieve the common good.[811]

397. Authority must recognize, respect and promote essential human and moral values. These are innate and "flow from the very truth of the human being and express and safeguard the dignity of the person; values which no individual, no majority and no State can ever create, modify or destroy". [812] These values do not have their foundation in provisional and changeable "majority" opinions, but must simply be recognized, respected and promoted as elements of an objective moral law, the natural law written in the human heart (cf. Rom 2:15), and as the normative point of reference for civil law itself.[813] If, as a result of the tragic clouding of the collective conscience, scepticism were to succeed in casting doubt on the basic principles of the moral law,[814] the legal structure of the State itself would be shaken to its very foundations, being reduced to nothing more than a mechanism for the pragmatic regulation of different and opposing interests.[815]

398. Authority must enact just laws, that is, laws that correspond to the dignity of the human person and to what is required by right reason. "Human law is law insofar as it corresponds to right reason and therefore is derived from the eternal law. When, however, a law is contrary to reason, it is called an unjust law; in such a case it ceases to be law and becomes instead an act of violence".[816] Authority that governs according to reason places citizens in a relationship not so much of subjection to another person as of obedience to the moral order and, therefore, to God himself who is its ultimate source.[817] Whoever refuses to obey an authority that is acting in accordance with the moral order "resists what God has appointed" (Rom 13:2).[818] Analogously, whenever public authority – which has its foundation in human nature and belongs to the order pre-ordained by God [819] – fails to seek the common good, it abandons its proper purpose and so delegitimizes itself.

c. The right to conscientious objection

399. Citizens are not obligated in conscience to follow the prescriptions of civil authorities if their

precepts are contrary to the demands of the moral order, to the fundamental rights of persons or to the teachings of the Gospel.[820] Unjust laws pose dramatic problems of conscience for morally upright people: when they are called to cooperate in morally evil acts they must refuse.[821] Besides being a moral duty, such a refusal is also a basic human right which, precisely as such, civil law itself is obliged to recognize and protect. "Those who have recourse to conscientious objection must be protected not only from legal penalties but also from any negative effects on the legal, disciplinary, financial and professional plane".[822]

It is a grave duty of conscience not to cooperate, not even formally, in practices which, although permitted by civil legislation, are contrary to the Law of God. Such cooperation in fact can never be justified, not by invoking respect for the freedom of others nor by appealing to the fact that it is foreseen and required by civil law. No one can escape the moral responsibility for actions taken, and all will be judged by God himself based on this responsibility (cf. Rom 2:6; 14:12).

c. The right to resist

400. Recognizing that natural law is the basis for and places limits on positive law means admitting that it is legitimate to resist authority should it violate in a serious or repeated manner the essential principles of natural law. Saint Thomas Aquinas writes that "one is obliged to obey ... insofar as it is required by the order of justice".[823] Natural law is therefore the basis of the right to resistance.

There can be many different concrete ways this right may be exercised; there are also many different ends that may be pursued. Resistance to authority is meant to attest to the validity of a different way of looking at things, whether the intent is to achieve partial change, for example, modifying certain laws, or to fight for a radical change in the situation.

401. The Church's social doctrine indicates the

criteria for exercising the right to resistance: "Armed resistance to oppression by political authority is not legitimate, unless all the following conditions are met: 1) there is certain, grave and prolonged violation of fundamental rights, 2) all other means of redress have been exhausted, 3) such resistance will not provoke worse disorders, 4) there is well-founded hope of success; and 5) it is impossible reasonably to foresee any better solution".[824] Recourse to arms is seen as an extreme remedy for putting an end to a "manifest, long-standing tyranny which would do great damage to fundamental personal rights and dangerous harm to the common good of the country".[825] The gravity of the danger that recourse to violence entails today makes it preferable in any case that passive resistance be practised, which is "a way more conformable to moral principles and having no less prospects for success".[826]

e. Inflicting punishment

402. In order to protect the common good, the lawful public authority must exercise the right and the duty to inflict punishments according to the seriousness of the crimes committed[827]. The State has the twofold responsibility to discourage behaviour that is harmful to human rights and the fundamental norms of civil life, and to repair, through the penal system, the disorder created by criminal activity. In a State ruled by law the power to inflict punishment is correctly entrusted to the Courts: "In defining the proper relationships between the legislative, executive and judicial powers, the Constitutions of modern States guarantee the judicial power the necessary independence in the realm of law".[828]

403. Punishment does not serve merely the purpose of defending the public order and guaranteeing the safety of persons; it becomes as well an instrument for the correction of the offender, a correction that also takes on the moral value of expiation when the guilty party voluntarily accepts his punishment.[829] There is a twofold purpose here. On the one hand, encouraging the re-insertion of the condemned

person into society; on the other, fostering a justice that reconciles, a justice capable of restoring harmony in social relationships disrupted by the criminal act committed.

In this regard, the activity that prison chaplains are called to undertake is important, not only in the specifically religious dimension of this activity but also in defence of the dignity of those detained. Unfortunately, the conditions under which prisoners serve their time do not always foster respect for their dignity; and often, prisons become places where new crimes are committed. Nonetheless, the environment of penal institutions offers a privileged forum for bearing witness once more to Christian concern for social issues: "I was ... in prison and you came to me" (Mt 25:35-36).

404. The activity of offices charged with establishing criminal responsibility, which is always personal in character, must strive to be a meticulous search for truth and must be conducted in full respect for the dignity and rights of the human person; this means guaranteeing the rights of the guilty as well as those of the innocent. The juridical principle by which punishment cannot be inflicted if a crime has not first been proven must be borne in mind.

In carrying out investigations, the regulation against the use of torture, even in the case of serious crimes, must be strictly observed: "Christ's disciple refuses every recourse to such methods, which nothing could justify and in which the dignity of man is as much debased in his torturer as in the torturer's victim". [830] International juridical instruments concerning human rights correctly indicate a prohibition against torture as a principle which cannot be contravened under any circumstances.

Likewise ruled out is "the use of detention for the sole purpose of trying to obtain significant information for the trial". [831] Moreover, it must be ensured that "trials are conducted swiftly: their excessive length is becoming intolerable for citizens and results in a real injustice". [832]

Officials of the court are especially called to exercise due discretion in their investigations so as not to violate the rights of the accused to confidentiality and in order not to undermine the principle of the presumption of innocence. Since even judges can make mistakes, it is proper that the law provide for suitable compensation for victims of judicial errors.

405. The Church sees as a sign of hope "a growing public opposition to the death penalty, even when such a penalty is seen as a kind of 'legitimate defence' on the part of society. Modern society in fact has the means of effectively suppressing crime by rendering criminals harmless without definitively denying them the chance to reform". [833] Whereas, presuming the full ascertainment of the identity and responsibility of the guilty party, the traditional teaching of the Church does not exclude the death penalty "when this is the only practicable way to defend the lives of human beings effectively against the aggressor". [834] Bloodless methods of deterrence and punishment are preferred as "they better correspond to the concrete conditions of the common good and are more in conformity to the dignity of the human person". [835] The growing number of countries adopting provisions to abolish the death penalty or suspend its application is also proof of the fact that cases in which it is absolutely necessary to execute the offender "are very rare, if not practically non-existent". [836] The growing aversion of public opinion towards the death penalty and the various provisions aimed at abolishing it or suspending its application constitute visible manifestations of a heightened moral awareness.

QUESTIONS

Compendium of the Social Doctrine of the Church of the Pontifical Council for Justice and Peace

1

According to the Social Doctrine of the Church, what role does human dignity play in promoting social justice and fundamental rights?

2

What ethical and moral principles are presented in the Compendium of the Social Doctrine of the Church to address economic inequalities and the just distribution of resources?

3

How does the Social Doctrine of the Church address the issue of human labor and its relationship to the dignity and rights of workers?

4

What are the ethical and social implications of the preferential option for the poor and marginalized, as presented in the Compendium of the Social Doctrine of the Church?

5

What is the vision of the Social Doctrine of the Church regarding the responsibility of individuals and institutions in building a just and solidary society?

